

Entre las notas comunes del rural más despoblado se encuentran las dificultades en la accesibilidad y el aislamiento, unidas a la falta de servicios, factores que inciden, aunque no de forma exclusiva, en la tasa de abandono de dichas zonas. En consecuencia, el freno a la sangría poblacional debe pasar, al menos y sin perjuicio de otras medidas, por la garantía del acceso a las infraestructuras y servicios necesarios. En esta línea, las Directrices Generales para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (DGENRD) incluyen entre los objetivos a perseguir el asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.

Sin embargo, hay que señalar que en el caso de los municipios rurales intermedios o semiurbanos no parece que la causa de su pérdida de población se encuentre en el acceso a los servicios, sino que influyen factores como la falta de oportunidades económicas y de empleo, además de otros condicionantes de tipo cultural o familiar. En este caso, respecto de la prestación de los servicios públicos, parece que el acento no debe ponerse tanto en la garantía de acceso a los mismos como en su prestación de forma eficiente y con altos niveles de calidad, generándose mayores niveles de bienestar que hagan más atractiva la vida en estas poblaciones.

En la consecución de los objetivos anteriores, los territorios inteligentes pueden resultar de gran ayuda.

En este marco, el objeto de esta ponencia consiste en el estudio de una de las estrategias innovadoras para la mejora de la calidad de vida: las smart communities. Con este fin, se partirá del análisis del concepto de smart community para, a continuación, identificar las fases de su proceso de planificación: primera fase (diseño de estrategias y programas de territorios inteligentes) y segunda fase (la aprobación de proyectos).